



ECONOMÍA EN ESTADO DE EMERGENCIA

Martín Morales

El descontento de la mayoría de los mexicanos a causa del incremento en los precios de los combustibles se explica por una mayor precarización de sus condiciones de vida.

Razones no les faltan: su bienestar está sujeto a un mayor deterioro debido a las presiones inflacionarias; sus bajísimos ingresos, basados en un salario mínimo de 80 pesos diarios no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas de sus familias y la pérdida de su poder de compra ha alcanzado el 26 por ciento sólo en los primeros días de enero de 2017, según cálculos de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El “gasolinazo” del 20 por ciento, los aumentos en los precios del gas, las tarifas eléctricas y otros bienes y servicios básicos son apenas los primeros golpes a la economía del pueblo mexicano.

Las contradicciones naturales del capitalismo se agudizan en México este año, siendo un país calificado como “economía emergente”, por su tamaño y posibilidades de crecimiento, en los hechos es una “economía en emergencia” por la acelerada pérdida de sus ingresos públicos y una deuda superior a los nueve billones de pesos que los tiburones del sistema financiero mundial, dirigido desde Estados Unidos (EE. UU.), podrían acrecentar en los próximos meses.

El presidente electo de EE. UU., aún antes de tomar posesión, presionó a em-

presas automotrices estadounidenses y productos refinados importados desde de otros países (Ford, General Motors, las plantas de ese país, que se pondrá en Nissan, entre otras) con la imposición de marcha a plenitud en 2018, cuando se aranceles adicionales a fin de obligarlas liberalicen los precios de las gasolin. a abandonar México, hecho en el que se advierte el propósito de ahogar y postrar económicamente a nuestro país.

Lo peor es que México no se encuentra en las mejores condiciones para enfrentar una situación así, según diversos analistas. Esto se debe a que ninguna de las 11 reformas neoliberales ha fructificado positivamente, incluida la hacendaria, que ni lejanamente se propuso establecer una nueva estructura fiscal progresiva con la que, además de cobrar más impuestos a quien más recursos posee, el Estado pudo haber subsanado el boquete financiero provocado por la baja del petróleo, la eventual reducción de inversiones estadounidenses y el proteccionismo comercial anunciado por Trump.

La reforma estructural energética resquebrajó a la industria nacional de hidrocarburos, una natural productora de dólares para el país, aún más perjudicada por la caída de los precios internacionales del crudo, desde los 100 dólares alcanzados hace dos años, a un promedio de 50 dólares.

Esas modificaciones constitucionales abrieron las puertas a los corporativos trasnacionales para que vengan a hacer negocios privados en México; en consecuencia se emprendió la formación de un nuevo mercado de combustibles con

Ante la urgencia de recursos públicos, el Gobierno federal adelantó para el 1° de enero de 2017, con el fin de introducir un impuesto a la venta por litro, lo que junto con el costo real de importación y transporte, representó un aumento del 20 por ciento en el precio del combustible. De esta forma, la gasolina Magna quedó en 15.99 pesos; Premium en 17.79 y el diesel en 17.05 pesos por litro. Ahora viene la revisión del tres de febrero cuando, de acuerdo con los analistas de las instituciones bancarias, el litro podría sufrir otro incremento del ocho por ciento.

Ante el adverso ambiente político y económico, marcado por la falta de dinero público, la salida de emergencia que tomó el Gobierno federal fue establecer una fuente fija de ingresos para apuntalar el presupuesto federal y dar solvencia al país ante el sistema financiero mundial.

Salida de emergencia: “gasolinazo”

El “gasolinazo” no surgió el 1° de enero de 2017. En la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2017 se estableció que el gobierno recaudaría el 36 por ciento más de ingresos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las gasoli-

nas, lo cual redundaría en una captación adicional de 75 mil 46 millones de pesos con respecto a lo obtenido en 2016. Es decir, en 2017 se recaudarán por este concepto 284 mil 432 millones de pesos.

Éstos son precisamente los “200 mil millones” de pesos de los que ha hablado el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, al asegurar que formaban parte de un supuesto “subsidio” a las gasolinas, que no podría seguirse aplicando, porque no habría dinero para sostener los programas sociales centrales, educación y salud sobre todo.

Es decir, que el gobierno planteó la realidad de manera distinta, aunque de cualquier manera, el costo social y político le ha resultado alto. Como era políticamente inviable aplicar Impuesto al Valor Agregado (IVA) de manera generalizada, para conseguir más recursos, optó por inflar el IEPS aplicado a las gasolinas, insumo fundamental que no puede dejar de adquirirse y que, por lo tanto, se convierte en una eficaz fuente de ingresos públicos, requeridos para taponar el boquete en los recursos públicos, ocasionado por el sobre-endeudamiento, explicó a *buzos* el doctor David Lozano Tovar, especialista del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM.

“Le venden a la población la idea de que la gasolina estaba subsidiada, pero eso no es cierto. El subsidio a la gasolina se retiró en el gobierno de Ernesto Ze-

dillo y fue principalmente a partir de la crisis financiera de 1995. A partir del gobierno de Zedillo es cuando se empieza a importar mayor cantidad de gasolina y comienzan a utilizar su discurso de que nos salía más barato importarla que producirla aquí. En realidad lo que se está aplicando actualmente es un impuesto disfrazado”, detalló Lozano.

El especialista explicó que luego del retiro del subsidio en el sexenio Zedillista, se optó por aplicar un IEPS a las gasolinas con el fin de obtener recursos, cuyo porcentaje era variable, de tal forma que cuando subía su precio, se bajaba el IEPS; pero ahora ese impuesto es fijo.

“Han urdido una mentira. El litro de gasolina vale seis pesos en EE. UU., así se compra, y si le sumamos los costos de traslado a México, que no son tantos, porque hay oleoductos, el precio sería aproximadamente de nueve pesos el litro; la otra parte del actual costo de la gasolina es el impuesto que el gobierno aplica para cubrir el agujero financiero ocasionado por el sobreendeudamiento. Entonces el problema no está en la liberación de los precios de la gasolina,

➤ sino en el acuerdo que cerró el gobierno mexicano con las empresas que van a tener las concesiones de la gasolina para su venta en el país (como Gulf), que a cambio de las concesiones habría un porcentaje de incremento en el precio por litro para empezar el proceso de su liberación, monto que quedaría en ma-

nos del gobierno mexicano. Esto fue lo que realmente pasó”, indicó el especialista de la UNAM.

El doctor Lozano también calificó como falso que el precio de la gasolina suba, porque su precio se incrementa en todo el mundo. “No es concebible que la gasolina nos cueste a nosotros igual que en Europa. En Francia, calculado en moneda nacional, el precio de la gasolina es de 18 pesos; en Italia de 17.50 pesos; en Alemania de 19 pesos. A Francia y España se las vende EE. UU. ¿Cómo va a ser posible que les salga igual la gasolina a ellos que a nosotros, que ni siquiera tenemos que usar barco petrolero para traerla?; tenemos varios oleoductos para traer la gasolina a Tamaulipas, Monterrey, y en algunos casos, a la zona norte, Sonora y Tijuana”.

Negocio de élite

A partir de la reforma energética se abrieron caminos a las inversiones extranjeras, entre otros, al negocio de las gasolinas, al que regresará (luego de la expropiación de 1938) el corporativo Standard Oil, convertido en Chevron, propiedad de la familia Rockefeller, con su marca de gasolinas Gulf, cuyo modelo de negocios reclamó de entrada, precios internacionales de los combustibles, anclados al dólar, lo que se satisfice adelantando un año la liberación de precios de los combustibles en 2017.

Mario Galicia Yépez, coordinador

del Comité de Estudios de la Energía (CEE), dijo a *buzos* que el problema de las gasolinas ha sido artificialmente

creado. “Las seis refinerías que se tienen en el país están trabajando actualmente a menos del 50 por ciento. Esto es un plan premeditado. No son instalaciones obsoletas, como dicen. Este plan viene desde el Pacto por México firmado por el gobierno y los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en 2012. Es un proyecto perverso apoyado por los tres niveles de gobierno. El objetivo es garantizar que se envíe el crudo a refinar a EE. UU, y luego nos vendan la gasolina cara, y mientras tanto, se dice en México que hay desabasto de gasolina, para crear una necesidad y asegurar la apertura del mercado a precio elevado, como le conviene a la élite nacional y a los corporativos extranjeros”.

También anotó que en las gasolinas que puso Pemex en Houston (con Shell) el litro de combustible se está vendiendo entre los siete y los siete pesos con 30 centavos (su equivalente en dólares), mientras que aquí esa misma gasolina cuesta 17 pesos. “Ahora los mexicanos que viven en la frontera nuevamente están cruzando hacia EE. UU. para abastecerse de gasolina, porque aún con la depreciación del peso frente al dólar les conviene más comprarla allá”.

Inflación: consecuencia inmediata De acuerdo con los analistas del CAM de la UNAM es absurdo que el gobierno diga que el alza de las gasolinas no repercutirá en los precios de los productos y servicios en general. También criticaron el anuncio presidencial del supuesto acuerdo para reducir los daños sociales por el incremento a las gasolinas.

En un estudio realizado sobre este fenómeno se indica que sólo en los primeros tres días de 2017 hubo una depreciación del 26 por ciento en el ingreso de los mexicanos, el deterioro más grande sufrido de un solo golpe en 40 años debido a los incrementos. En el caso del transporte de pasajeros y de mercancías es de un 15 por ciento, lo que está repercutiendo en aumentos en los artículos de primera necesidad. Por ejemplo en Jalisco, Guanajuato y Michoacán el precio de la leche aumentó el 32 por ciento.

Los especialistas de la Facultad de Economía de la UNAM calcularon que la inflación llegará a mediados de 2017 a por lo menos 10 por ciento, porque habrá paulatinos incrementos a los precios de bienes y servicios. Sólo el aumento en los servicios impactará con un siete por ciento la inflación general, dijeron.

Modelo obsoleto

El apego del gobierno mexicano al modelo económico neoliberal está pasando la factura al país entero, porque sus

dirigentes y los grandes empresarios exportadores se más que nunca están esperanzados en mantener la exportación de productos manufactureros mexicanos a los mercados de EE. UU., donde colocan más del 80 por ciento de sus productos. Esta expectativa, sin embargo, podría desbaratarse estrepitosamente tan pronto como Trump tome posesión.

La exagerada apuesta al libre mercado para lograr crecimiento económico seguirá resquebrajando el mercado interno, hoy carente de una política industrial propia y de una planta de hidrocarburos capaz de satisfacer la demanda de energéticos, sin tener que importarlos y pagarlos en dólares. Esta situación pudo evitarse fortaleciendo las actuales refinerías y construyendo nuevas, anotó Mario Galicia del CEE.

Con este panorama, en México hay una anticipación de menores ingresos de moneda estadounidense, tanto por una reducción en la inversión externa como por la salida de capitales hacia EE. UU., donde se están ofreciendo mayores rendimientos para atraer recursos invertidos en “países emergentes”.

Todo esto ha originado un disparo en el precio del dólar en México, que al cierre de esta edición rebasa los 22 pesos, mostrando una depreciación mayor a menos 15 por ciento, únicamente desde que Trump ganó la presidencia en noviembre pasado. Además las expectativas son de una devaluación mayor a

partir del 20 de enero.

Con el aumento en el precio del dólar la deuda externa mexicana se incrementa de manera automática, tanto en su principal como en los intereses; con esto aumenta la necesidad de recursos públicos para sostenerla. Antes de todo esto, en agosto de 2016, su monto global había sido calculado por especialistas del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) en más de nueve billones de pesos, cuya mayor parte es deuda externa en dólares.

Al mismo tiempo, los ingresos escasean. Por el contubernio entre la llamada “clase política” y el gran empresariado nacional y extranjero, se ha ofrecido protección financiera a los negocios privados, sin exigirles impuestos en su justa magnitud, lo cual ha impedido incrementar los recursos en las arcas nacionales. A esto se suma la estrepitosa caída de los precios internacionales del petróleo, que hoy ronda en los 50 dólares el barril mientras que hace año y medio el barril estaba en más de 100 dólares. El crudo es el producto más vendido por México en el mundo.

El resultado es una drástica caída en los ingresos nacionales, al grado de enfilar al Gobierno federal hacia la insolvencia y la descalificación por parte del sistema financiero mundial, lo que originaría no sólo una reducción de la confianza de inversionistas internacionales para hacer negocios en el país, sino también un in-

cremento de la deuda externa hasta hacerla impagable, debido a un consecuente disparo en las tasas de interés cobradas en el sistema financiero mundial al país derivado del riesgo de su no-pago.

Una reducción contundente de ingresos nacionales afectaría naturalmente al Presupuesto Federal de Egresos y, en esa misma proporción, al gasto público de aplicación social como la educación, la salud y los programas de apoyo a sectores marginados.

El doctor Abel Pérez Zamorano, director de la División de Ciencias Económico Administrativas (DICEA) de la Universidad Autónoma Chapingo (UACH) escribió sobre esto lo siguiente: “El 1º de enero, el pueblo recibió un duro golpe con el aumento del 20 por ciento en el precio de la gasolina, y aumentos menores pero significativos en gas y electricidad, lo cual ha desatado justa indignación social y airadas protestas mediante bloqueos de carreteras, marchas y asaltos a gasolineras para hacerse de combustible gratis como represalia. Pero llama la atención que no se analiza el problema; todo se reduce a consignas y epítetos sin esclarecer las causas de fondo y, por ende, las verdaderas soluciones”.

Otros detalles que Pérez Zamorano puso de relieve fueron que en 2012 México adquirió el 60 por ciento de toda la gasolina que exportó EE. UU. (23.5 millones de barriles), convirtiéndose en

su principal cliente. En contraste, anotó, en 2004 Pemex producía 75 por ciento de la que se consumía, para 2012, el 50 por ciento, y actualmente apenas el 38 por ciento, algo inaudito si se toma en cuenta que el país es petrolero. “Generamos la materia prima, pero sometidos a las reglas de la globalización y los dictados del imperio, exportamos crudo para importar gasolina: en casa del herrero, cuchillo de palo”.

“En las finanzas públicas, ciertamente, escasean los recursos y ni con recortes al gasto ha sido posible mantener el equilibrio fiscal. Disminuyó el ingreso petrolero al caer el precio internacional desde 2012, y reducirse, consecuentemente, la producción: el precio del barril de la mezcla mexicana pasó de 101.9 dólares a 38.1; sólo entre febrero de 2014 y el mismo mes de 2015 esos ingresos cayeron en 46.3 por ciento”, expuso.

Apuntó que en 2012 el 40.7 por ciento del ingreso gubernamental procedía del petróleo y entre enero y abril de 2016 se

redujo al 13.3, es decir, el 27.4 por ciento menos. Expuso que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda hoy se perciben por ese rubro los más bajos ingresos de que se tenga registro. Por este motivo enfatizó- el petróleo ya no garantiza el equilibrio fiscal.

El doctor Pérez Zamorano enfatizó que en materia de gasto, el gobierno se endeudó contundentemente, de tal forma que a inicios del sexenio la deuda pública representaba el 20 por ciento del producto interno bruto (PIB) y hoy representa el 51.9, aunque según la Secretaría de Hacienda en 2015 se hizo la mayor erogación histórica para el pago de intereses de la deuda externa: 28 mil 845 millones de dólares.

“Ya no hay, pues, mucho margen para echar mano de este recurso, so pena de provocar alteraciones inmanejables en las variables macroeconómicas, aumentar el riesgo país y elevar astronómicamente los intereses a pagar. Por eso hoy se acude al “gasolinazo”, apuntó el economista. **b**







Ante la urgencia de recursos públicos, el Gobierno federal adelantó para el 1° de enero de 2017, con el fin de introducirle un impuesto a la venta por litro, lo que junto al costo real de importación y transporte, representó un aumento de 20 por ciento al precio del combustible

Foto: Cuartoscuro

“Las seis refinерías que se tienen en el país están trabajando actualmente a menos del 50 por ciento. Esto es un plan premeditado. No son instalaciones obsoletas, como dicen”.

Mario Galicia Yépez

Foto: Cuartoscuro



